

**Fecha:** 19 de septiembre de 2023  
**Ref.:** SPM/cmv  
**Asunto:** Rtdo. Resolución MC 102/2023  
**Recurso Tribunal:** 423/2023

**AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**  
**Servicios Centrales**  
C/ Judería 1. Edif. Vega del Rey 1  
CAMAS 41900  
Sevilla

Se notifica que con fecha 15 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha adoptado la Resolución de Medida Cautelar 102/2023, en relación a la solicitud de medida cautelar formulada por la entidad **AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN SOCIEDAD LIMITADA**, en su escrito de recurso especial en materia de contratación, referente a la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Contrato de servicios de actividades extraescolares mediante acuerdo marco por procedimiento abierto con uno o con varios empresarios y con varios criterios de adjudicación” (Expte. CONTR 2022 0000637463 (00070/ISE/2022/SC), en relación al lote 6, promovido por la Agencia Pública Andaluza de Educación, entidad dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Asimismo se hace constar que la resolución remitida es copia auténtica del documento original que obra en este Tribunal.

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

Fdo: Susana Elena Palma Martos



C/ Barcelona, 4-6 · 41001 Sevilla  
Telf.: 671 53 08 56 - 671 53 08 53 · Fax: 955 51 50 41  
comunicaciones.tarcja@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR	SUSANA ELENA PALMA MARTOS	19/09/2023	PÁGINA 1/5
VERIFICACIÓN	Pk2jmM8XCYQC4YDHK2AV8V3SFYSCDB	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

**Recurso 423/2023**  
**Resolución MC. 102 /2023**  
**Sección Segunda**

## **RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

Sevilla, 15 de septiembre de 2023

**VISTA** la solicitud de medida cautelar formulada por la entidad **AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN SOCIEDAD LIMITADA**, en su escrito de recurso especial en materia de contratación, referente a la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Contrato de servicios de actividades extraescolares mediante acuerdo marco por procedimiento abierto con uno o con varios empresarios y con varios criterios de adjudicación” (Expte. CONTR 2022 0000637463 (00070/ISE/2022/SC), en relación con el lote 6, promovido por la Agencia Pública Andaluza de Educación, entidad dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha dictado la siguiente

### **RESOLUCIÓN**

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** El 8 de septiembre de 2023, se ha presentado en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía dirigido al Tribunal, escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN SOCIEDAD LIMITADA, contra su exclusión del procedimiento de licitación del acuerdo marco arriba mencionado en relación con el lote 6. En su escrito de recurso, la entidad recurrente solicita la suspensión del procedimiento de adjudicación.

**SEGUNDO.** La Secretaría de este Tribunal dio traslado al órgano de contratación del escrito de interposición de recurso y le solicitó, entre otra documentación, las alegaciones sobre la medida cautelar de suspensión instada por la entidad recurrente. La documentación solicitada se ha recibido en este Órgano.

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.** La entidad recurrente solicita la medida cautelar de suspensión en su escrito de interposición del recurso especial en materia de contratación, por lo que ha de estarse, respecto a su tramitación y adopción, a lo dispuesto en los artículos 49 y 56.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

**SEGUNDO.** Las medidas cautelares, como señala el artículo 49.1 de la LCSP, irán dirigidas a corregir infracciones del procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados y podrán estar incluidas,



FIRMADO POR	SUSANA ELENA PALMA MARTOS	19/09/2023	PÁGINA 2/5
VERIFICACIÓN	Pk2jmM8XCYQC4YDHK2AV8V3SFYSCDB	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.

Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha tenido oportunidad de pronunciarse con frecuencia sobre la adopción de medidas cautelares en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos, si bien los escasos pronunciamientos resultan de enorme interés. En este sentido, en el asunto C-424/01 (ATJ de 9 de abril de 2003), el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la ponderación que debe llevarse a cabo para justificar la adopción de la medida, indicando que la Directiva 89/665/CEE no prohíbe la previa ponderación de las posibilidades de que, con posterioridad, pudiera prosperar una pretensión de anulación de la decisión de la entidad adjudicadora con base en su ilegalidad, por lo que queda en manos del Derecho nacional la regulación de esta exigencia.

Ciertamente, la regulación de las medidas cautelares en la legislación de contratos públicos no define los parámetros a tener en cuenta para su adopción o denegación. Es por ello que debe acudir con carácter supletorio a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre suspensión de la ejecución del acto impugnado y a la propia doctrina del Tribunal Supremo en la materia –se citan las Sentencias de 25 de febrero de 2011 y de 26 de septiembre de 2011 (RJ 2011\11\1653 y RJ 2011\7212) –, pues los principios asentados por el Alto Tribunal con relación al proceso cautelar cabe entenderlos de aplicación en el marco de este procedimiento.

Así, el Tribunal Supremo señala que toda decisión sobre las medidas cautelares debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso y teniendo en cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional, que puede resumirse en los siguientes puntos:

- **Necesidad de justificación o prueba, aún incompleta**, de aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la medida. La mera alegación sin prueba no permite estimar como probado que la ejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- **El periculum in mora**: es decir, la medida ha de ir encaminada a asegurar que la futura resolución del procedimiento principal pueda llevarse a la práctica de modo útil.
- **Ponderación de los intereses concurrentes**: se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar o no la suspensión según el grado en que dicho interés esté en juego. En definitiva, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto.
- **La apariencia de buen derecho (fumus boni iuris)**: supuso una gran innovación respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de las medidas cautelares, si bien la Jurisprudencia del Tribunal Supremo viene limitando, tras la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, la aplicación del principio a aquellos supuestos en que el acto impugnado evidencia un error de tal naturaleza y magnitud que en sí mismo es causa suficiente para provocar la suspensión de la ejecución del acto, sin necesidad de aventurarse en enjuiciamientos más profundos, propios ya de un análisis de fondo.



FIRMADO POR	SUSANA ELENA PALMA MARTOS	19/09/2023	PÁGINA 3/5
VERIFICACIÓN	Pk2jmM8XC4YDHC2AV8V3SFYSCDB	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

**TERCERO.** En el supuesto analizado, la entidad recurrente solicita la medida cautelar de suspensión en virtud del artículo 49 de la LCSP, en aras de evitar posibles perjuicios tanto a ella, como a terceros (v.g. eventuales destinatarios del servicio), así como a los intereses del organismo promotor del expediente de contratación.

Por su parte, el órgano de contratación en su informe sobre la cuestión planteada en el recurso manifiesta que *“con dicha suspensión del procedimiento de adjudicación del lote objeto del presente recurso, se paraliza la contratación de los contratos basados para la realización de las actividades extraescolares en todos los centros docentes que imparten segundo ciclo de educación infantil, la educación primaria, la educación especial o la educación secundaria obligatoria, en toda la provincia de Jaén, con las consecuencias que esto conlleva tanto para alumnos como para sus tutores legales. Es por ello que por este órgano de contratación se solicita no se atienda a lo solicitado por la entidad recurrente, ya que el interés público no admite dilación alguna y concurren circunstancias extraordinarias y excepcionales que imponen la ejecución inmediata del acto impugnado, debiendo prevalecer el interés general sobre el particular de la recurrente”.*

Pues bien, se ha de indicar que el proceso cautelar en el marco del procedimiento principal del recurso especial va esencialmente dirigido a asegurar la eficacia de la resolución de este último, previéndose además breves plazos legales para la tramitación del recurso, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento judicial cuya tramitación es más compleja y su duración más prolongada. Es por ello por lo que las medidas cautelares en el seno del recurso especial no han de serlo por un lapso dilatado, lo que ya supone de partida un menor riesgo o perjuicio para el interés público que demanda la adjudicación y formalización del contrato.

De otro lado, no puede obviarse que, según tiene manifestado el Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución se satisface facilitando que la ejecutividad del acto administrativo pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que este, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión. En este sentido, la Sentencia 78/1996, de 20 de mayo, señala que *«La ejecución inmediata de un acto administrativo es, pues, relevante desde la perspectiva del art. 24.1 de la CE ya que si tiene lugar imposibilitando el acceso a la tutela judicial puede suponer la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o incluso prejuzgar irreparablemente la decisión final del proceso causando una real indefensión»*

Pues bien, a la vista de lo alegado por las partes, este Tribunal considera que en el caso que nos ocupa, la entidad recurrente no justifica ni invoca los concretos perjuicios que le irrogaría la continuación del procedimiento de adjudicación, limitándose a solicitar la suspensión con carácter genérico.

Por tanto, aún cuando el órgano de contratación no concreta los daños que la suspensión irrogaría al procedimiento principal, ni especifica cuáles son las circunstancias extraordinarias y excepcionales que imponen la ejecución inmediata del acto impugnado, aludiendo de manera genérica a las exigencias que demanda la satisfacción del interés público, no obstante, este Tribunal, en la necesaria ponderación de los intereses en conflicto que ha de realizar, aprecia, atendiendo a la naturaleza de los servicios licitados y a los destinatarios de los mismos, que procede la denegación de la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación, sin que ello suponga prejuzgar el fondo de la controversia objeto del recurso interpuesto, y sin perjuicio de los efectos sobre la licitación de una potencial estimación del recurso conforme a lo previsto en los artículos 42.1 y 57.2 de la LCSP y 36.1 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual, apro-



FIRMADO POR	SUSANA ELENA PALMA MARTOS	19/09/2023	PÁGINA 4/5
VERIFICACIÓN	Pk2jmM8XC4YDHC2AV8V3SFYSCDB	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

bado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, debiendo prevalecer el interés general sobre el particular de la recurrente.

Por todo lo expuesto, este Tribunal,

**ACUERDA**

**ÚNICO.** Denegar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación del “Contrato de servicios de actividades extraescolares mediante acuerdo marco por procedimiento abierto con uno o con varios empresarios y con varios criterios de adjudicación” (Expte. CONTR 2022 0000637463 (00070/ISE/2022/SC), en relación con el lote 6, promovido por la Agencia Pública Andaluza de Educación, entidad dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

**NOTIFÍQUESE** la presente resolución a las partes interesadas en el procedimiento.

De conformidad con el artículo 49.2 de la LCSP, contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal de recurso.



FIRMADO POR	SUSANA ELENA PALMA MARTOS	19/09/2023	PÁGINA 5/5
VERIFICACIÓN	Pk2jmM8XCYYQC4YDHK2AV8V3SFYSCDB	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	